



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Orden reguladora del Órgano Centralizado de Prevención del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

El Proyecto sometido a informe tiene por objeto la creación por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo al que se refiere el artículo 27 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, teniendo el mismo la configuración de órgano de incorporación obligatoria, a los efectos previstos en el artículo 44 del Reglamento de desarrollo de la citada Ley, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.

A tal efecto, se prevé expresamente en el artículo 3 la incorporación automática al Órgano centralizado de prevención de todos los registradores como consecuencia de la aprobación de la Orden, si bien habrá de entenderse que la incorporación tendrá lugar en el plazo de cuatro meses desde su publicación, previsto en su disposición final segundo.

Corresponderá al Órgano, conforme al artículo 5.1 examinar “con especial atención aquellas operativas en las que concurren las circunstancias establecidas en el artículo 17 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, remitidas para su análisis por los registradores o bien detectadas de manera directa por el Órgano Centralizado de Prevención, mediante el tratamiento de la información contenida en las bases de datos registrales”, para lo que “los registradores deberán facilitar al Órgano Centralizado de Prevención cualquier información que éste les requiera”, conservando la información objeto de examen especial por un período de diez años.

Igualmente, el artículo 6 del Proyecto se refiere a la comunicación por indicio, llevándose a cabo la comunicación “en nombre y por cuenta, en su caso, del registrador que la hubiera remitido para su análisis”. Asimismo, se establecen las funciones de análisis de riesgo, elaboración del manual de procedimientos de prevención y formación previstas en el artículo 44.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2010, encomendándose igualmente al



Órgano Centralizado la supervisión del cumplimiento de las previsiones de dicha Ley por parte de los registradores colegiados.

El artículo 11 del Proyecto se refiere a la prohibición de revelación establecida en la normativa de prevención del blanqueo de capitales, señalando su primer párrafo que “Los registradores y los miembros del Órgano Centralizado de Prevención no revelarán, ni al solicitante de la inscripción ni a terceros, el suministro de información al Servicio Ejecutivo de la Comisión, a petición de éste, ni la realización de una comunicación de operativa sospechosa o el hecho de estar realizando el proceso de examen especial”.

Finalmente, el artículo 13 dispone que “el Órgano Centralizado de Prevención ostentará, respecto de los ficheros automatizados de datos creados para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y en su normativa de desarrollo, la condición de responsable y encargado del tratamiento, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”.

Una vez descrito el contenido normativo del Proyecto puede fácilmente comprobarse que la mayor parte de sus previsiones vienen a reproducir, con las especificaciones que resultan de aplicación al ámbito descrito en el mismo, lo establecido con carácter general, tanto para los notarios como para los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, a los que se refiere el artículo 2.1 n) de la Ley 10/2010, en el artículo 44 del Reglamento de desarrollo de dicha Ley, cuando establece el régimen aplicable a los órganos centralizados de prevención de incorporación obligatoria referidos a ambos colectivos.

La peculiaridad en cuanto a la aplicación de las normas de protección de datos se deriva de la dicción literal del artículo 13, que otorga al Órgano Centralizado objeto de regulación por el Proyecto, de forma simultánea y sin establecer matización alguna, la condición de responsable y encargado del tratamiento respecto de los “ficheros automatizados” de datos que fueran creados para el cumplimiento de la Ley 10/2010 y su Reglamento, por cuanto este tenor literal no puede estrictamente ser admisible en el ámbito de aplicación de la normativa de protección de datos de carácter personal, teniendo en cuenta los conceptos de responsable y encargado del tratamiento establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 y lo previsto en su artículo 12.4, a cuyo tenor “en el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado, también, responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente”.

No obstante, es preciso poner de manifiesto que la conclusión que acaba de alcanzarse no se refiere a la cuestión de fondo que pretende abordarse con el precepto, sino a la imposibilidad de que se establezca la



coexistencia de ambas naturalezas jurídicas sin ningún tipo de aclaración o matización.

En este sentido, el propio Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2010 ya aclara el alcance de la previsión que ahora se establece en el artículo 13 del Proyecto objeto de informe, cuando establece en su artículo 44.6 lo siguiente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32.4 de la Ley 10/2010, los órganos centralizados de prevención a los que se refiere este artículo tendrán la condición de responsables de los tratamientos que lleven a cabo por propia iniciativa o a requerimiento de la Comisión o de sus órganos de apoyo, o de cualquier otra autoridad pública legalmente habilitada, con la finalidad de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Igualmente serán responsables de los tratamientos efectuados en el marco de sus funciones de análisis de riesgo y de supervisión establecidos en la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como de los que se deriven directamente del acceso y tratamiento de la información de los datos contenidos en los ficheros de los que los propios órganos fueran responsables, tanto en el marco de las obligaciones de diligencia debida como en las de examen especial e información establecidas en la normativa de prevención del blanqueo de capitales.

En los supuestos a los que se refiere el apartado anterior, no será de aplicación a la actividad de los órganos centralizados de prevención lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.”

Quiere ello decir que, efectivamente los órganos centralizados de prevención, en tanto actúen en nombre y por cuenta de los profesionales a los que los mismos se refieren tendrán la condición de encargados del tratamiento de aquéllos. No obstante, la legislación de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ha establecido, al menos en lo que se refiere a los colectivos de notarios y registradores, un régimen especialísimo en el que, por una parte, la adscripción al órgano centralizado es obligatoria, de forma que su actuación no es meramente asesora o consultiva, y por otra la actuación del órgano centralizado se encuentra dotada de un régimen de especial autonomía respecto de los profesionales, actuando en la práctica como un sujeto obligado específico que analiza por sí mismo determinadas operaciones y se comunica en su propio nombre con las autoridades competentes en materia de prevención.

En este sentido, debe recordarse que el apartado 6 del artículo 44 del Reglamento de la Ley 10/2010 fue introducido a instancias de esta Agencia, al



proponer esta aclaración en el informe emitido en fecha 18 de febrero de 2014 en relación con el Proyecto del citado Reglamento. La cuestión se analizaba con detalle en el apartado III del citado informe indicándose lo siguiente:

“(...) debe hacerse en primer lugar referencia a las relacionadas con la aplicación de lo establecido por el artículo 32.4, según el cual “los órganos centralizados de prevención a los que se refiere el artículo 27 tendrán la condición de encargados del tratamiento a los efectos previstos en la normativa de protección de datos de carácter personal”.

Los citados órganos centralizados aparecen regulados, como se indica en el precepto, por el artículo 27 de la Ley, cuyo apartado 1 señala en el párrafo segundo que los mismos “tendrán por función la intensificación y canalización de la colaboración de las profesiones colegiadas con las autoridades judiciales, policiales y administrativas responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, sin perjuicio de la responsabilidad directa de los profesionales incorporados como sujetos obligados. El representante del órgano centralizado de prevención tendrá la condición de representante de los profesionales incorporados a efectos de lo dispuesto en el artículo 26.2”.

No obstante, el artículo 27.1 parece ampliar ese ámbito competencial, dado que prevé que el análisis de las operaciones a las que se refiere el artículo 17 de la Ley, es decir, las sometidas a examen especial podrá llevarse a cabo “por propia iniciativa o a petición de los profesionales incorporados”, previéndose igualmente que los órganos comunicarán dichas operaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión “cuando concurren las circunstancias establecidas en el artículo 18”.

Además, el propio precepto prevé que “los profesionales incorporados deberán facilitar al órgano centralizado de prevención toda la información que éste les requiera para el ejercicio de sus funciones” y que aquéllos “facilitarán toda la documentación e información que la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o sus órganos de apoyo les requieran, directamente o por intermedio del órgano centralizado de prevención, para el ejercicio de sus competencias”.

Además, debe tenerse en cuenta que el precepto establece una distinción entre los órganos centralizados de prevención de incorporación voluntaria y los de incorporación obligatoria, al indicar en el artículo 27.3 que “con excepción de los funcionarios a que se refiere el artículo 2.1.n), la incorporación de los sujetos obligados a los órganos centralizados de prevención será voluntaria”.



(...)

Respecto de los órganos centralizados de prevención de incorporación obligatoria ya se ha señalado que la Ley 10/2010 diferencia entre las operaciones que son llevadas a cabo por cuenta de los profesionales incorporados de aquéllas que se llevan a cabo a iniciativa propia, pudiendo el órgano centralizado de prevención proceder al análisis de determinadas operativas incluso sin conocimiento de los fedatarios públicos integrados en la profesión colegiada; es decir, los notarios y registradores, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.3 de la Ley.

Esta diferenciación se plasma igualmente en el Proyecto sometido a informe, dado que el artículo 42.2, al enumerar las funciones de los órganos centralizados de prevención en los dos supuestos indicados hace mención no sólo de las que se llevan a cabo por cuenta de los funcionarios incorporados a los colegios, sino también de las que se realizan a iniciativa propia e incluso a requerimiento específico del Servicio Ejecutivo.

A tal efecto, el Proyecto otorga a los órganos centralizados de prevención la función de averiguación de la titularidad real derivada de los actos en que intervengan los notarios o registradores (apartado c), la atención de los requerimientos de información de los órganos competentes en materia de prevención, sin que la misma se lleve a cabo en su condición de mandatario de los colegiados (apartado e), el análisis del riesgo de la actividad desarrollada por los colegiados en atención a diversos criterios citados por el apartado f) o la supervisión del cumplimiento de los procedimientos de control interno por parte de los colegiados, cuyos resultados serán asimismo transmitidos al Servicio Ejecutivo (apartado i).

En particular, e incluso en relación con la comunicación por cuenta de los funcionarios de las operaciones al Servicio Ejecutivo, a la que se refiere el apartado b) del artículo 42.2 del proyecto, se señala expresamente que “excepcionalmente, el órgano centralizado de prevención podrá abstenerse de informar al funcionario interviniente cuando así sea solicitado por el Servicio Ejecutivo o cuando estime que ello pudiera poner en riesgo la investigación”. Además, como se establece en el propio artículo 27.2 de la Ley, conforme al artículo 42.3, párrafo primero “los órganos centralizados podrán requerir de los funcionarios incorporados cualquier información o documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones”.

(...) esta Agencia ha venido entendiendo que, sin perjuicio de que los órganos centralizados de prevención tengan, cuando actúan por cuenta



de los sujetos obligados integrados en la correspondiente organización colegial, la condición de encargados del tratamiento, dichos órganos podrán, en los supuestos de órganos de integración obligatoria, como sucede en el caso del Consejo general del Notariado, decidir en determinados supuestos sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento llevado a cabo para el cumplimiento de determinadas obligaciones que les impone la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, lo que les convertirá en esos supuestos en responsables del tratamiento.

Por este motivo, se hace necesario clarificar el tenor del artículo 27.4 de la Ley 10/2010 a través del Reglamento sometido a informe, previendo expresamente que en los supuestos de órganos centralizados de prevención de incorporación obligatoria determinadas funciones que atribuyen a los mismos tanto la citada Ley como el Proyecto sometido a informe, en desarrollo de la misma, implican la asunción por aquellos órganos de la condición de responsable del tratamiento.”

Consecuencia de lo que acaba de indicarse es que si bien es cierto que en relación con los tratamientos de datos llevados a cabo en el ámbito establecido por la Ley 10/2010 los órganos centralizados de prevención podrán ostentar la naturaleza de responsable o encargado del tratamiento atendiendo a la finalidad de los mismos así como a la capacidad de decisión que sobre aquéllos les otorga la normativa vigente en la materia, no es ajustado al régimen de la Ley Orgánica un precepto que se limita a indicar esa coexistencia de ambas naturalezas sin especificar los casos en que el Órgano Centralizado de Prevención ostentará una u otra.

Al propio tiempo, no debe olvidarse que el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 15/1999 delimita su ámbito de aplicación, señalando que “la presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”. Quiere ello decir que la expresa referencia al “tratamiento automatizado” de los datos no resulta procedente, siendo de aplicación la normativa de protección de datos a cualesquiera tratamientos de los mismos, se lleven a cabo o no de forma automatizada, tal y como se deriva del artículo 3 c) de la Ley Orgánica.

De este modo, sería necesaria una profunda modificación de la redacción del artículo 13 del Proyecto que, **por una parte, suprimiera la referencia a los tratamientos “automatizados” y, por otra, clarificase que la condición de responsable del tratamiento concurrirá en el Órgano Centralizado de Prevención en los supuestos y para las finalidades establecidas en el artículo 44 del Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2010, lo que podría efectuarse por remisión a dicho precepto, de forma que el Proyecto se limitase a indicar que el Órgano será responsable del**



tratamiento en los supuestos a los que se refiere el artículo 44.6 del Reglamento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 32.4 de la Ley 10/2010 para los supuestos en que aquél se limite a actuar en nombre y por cuenta de los registradores.

Por otra parte, y dentro precisamente de las especialidades aplicables a las profesiones a las que se refiere el artículo 2.1 n) de la Ley 10/2010, ya se ha indicado que el artículo 44.2 b) del Reglamento prevé que, en ocasiones, la prohibición de revelación de que las operaciones han sido objeto de análisis especial o comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, alcance igualmente, de modo excepcional, al propio registrador actuante. **Esta previsión debería igualmente incluirse en el artículo 11 del Proyecto**, toda vez que la prohibición de revelación actúa como límite del ejercicio por el interesado de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la normativa de protección de datos de carácter personal.